



de que alrededor de 100 estudiantes habrían accedido a los estudios de Grado de varias Universidades andaluzas pese a no haber realizado o superado la prueba de selectividad.

La situación se habría producido porque la propia aplicación informática de Distrito Único Universitario de Andalucía les habría permitido inscribir su solicitud de pre-inscripción pese a carecer de calificación en la Prueba de Acceso a la Universidad. Una vez detectado el problema, las universidades habrían anulado la matrícula a las personas que se encontraban en tal situación, devolviéndoles el importe del precio público abonado. Esta decisión habría originado importantes perjuicios a los afectados. El expediente de queja aún no está concluido.

## IV.2.2

### **Acceso a la Universidad por el cupo reservado a personas con discapacidad**

La inclusión en la normativa que regula el acceso a los estudios universitarios de un cupo de plazas reservadas para personas con discapacidad supuso un gran avance en la lucha por la integración educativa y social de este colectivo y representó un ejemplo claro de las políticas de discriminación positiva hacia las personas con discapacidad.

Tras años en que la aplicación de este cupo reservado se desarrolló sin problemas dignos de mención, durante 2014 surgieron algunos problemas que obligaron a esta Institución a intervenir de oficio y que vinieron originados, en un caso por una modificación normativa poco acertada y, en otro caso, por la falta de concreción de la



**Durante 2014 surgieron algunos problemas originados, en un caso por una modificación normativa poco acertada y, en otro caso, por la falta de concreción de la normativa acerca de la forma de acreditar los requisitos exigidos para el acceso por este cupo.**

normativa acerca de la forma de acreditar los requisitos exigidos para el acceso por este cupo.

En relación con el primero de los casos señalados, el problema surge con la regulación que de este cupo de reserva para personas con discapacidad realizó el artículo 26 del Real Decreto 412/2014, que textualmente señala lo siguiente:

«Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma.»

Esta norma sustituye a la regulación contenida en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, que queda derogado y que regulaba este cupo en su artículo 5, incluyendo el siguiente precepto:

*«No obstante, y en atención a las personas con discapacidad, cuando no se oferte una titulación y centro en la fase*



*extraordinaria, por haberse cubierto la totalidad de las plazas en la fase ordinaria, pero alguna o algunas plazas de este cupo de reserva fueron acumuladas al cupo general en la fase ordinaria por no haber solicitantes suficientes, las universidades podrán aumentar las plazas, hasta completar el 5 por 100, para que accedan los estudiantes con discapacidad que participen en la fase extraordinaria.»*

Esta medida permitía a las personas con discapacidad optar al cupo de reserva en el mes de septiembre ya que, hasta entonces, las plazas reservadas para discapacidad que no hubieran sido ocupadas se acumulaban al cupo general en la convocatoria ordinaria y no volvían a ser ofertadas.

La nueva regulación contenida en el Real Decreto 412/2014, aunque establece al igual que la anterior que las plazas que no se cubran de cada cupo de reserva pasarán al cupo general, no regula expresamente que cuando se agoten las plazas de una titulación y centro en la convocatoria ordinaria puedan ampliarse las plazas inicialmente ofertadas con objeto de alcanzar el mínimo del 5% en favor de las personas con discapacidad. Esto ha supuesto, que en el curso 2014-2015 algunas de estas personas se hayan encontrado que no existía oferta de plazas para los estudios deseados en el mes de septiembre, a pesar de que el cupo no se habría agotado en la convocatoria ordinaria de septiembre. Ello les supone tener que esperar un curso entero para poder desarrollar sus estudios universitarios, a pesar de los esfuerzos realizados para llegar hasta aquí, volviendo así al panorama existente antes de la aprobación del Real Decreto 1892/2008.

Antes esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz consideró oportuno iniciar una actuación de oficio, que se concretó en la [queja 14/4576](#). En el curso de dicha actuación nos dirigimos a las Universidades públicas de Andalucía y a la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía trasladándoles una serie de [Sugerencias](#) con objeto de que se admitieran las solicitudes de las personas con discapacidad que hubieran participado en la convocatoria de septiembre del proceso de preinscripción



universitaria, aun cuando no se hubieran ofertado plazas en la titulación y centro por haberse cubierto la totalidad de las plazas en la fase ordinaria, siempre que alguna o algunas de las plazas del cupo de reserva ofertadas en la fase ordinaria de junio hubieran sido acumuladas al cupo general por no haber solicitantes suficientes.

La respuesta recibida de las Administraciones interpeladas a estas Sugerencias podemos calificarla de muy positiva, por cuanto se acordó por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, en la sesión celebrada el 6 de octubre de 2014, que se atendería a quienes reunieran los requisitos para acceder por el cupo de discapacidad en la fase 2 (siempre que no se hubiese agotado la reserva del 5% de plazas en la fase 1). Esta decisión habría supuesto la ampliación de un total de 19 plazas para todo el Distrito Único andaluz. Por otra parte, tuvimos conocimiento de que en la misma sesión de debate se habría acordado remitir una carta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con objeto de que se regulase expresamente el mantenimiento del cupo de reserva para personas con discapacidad en la fase extraordinaria.

En este mismo sentido, la Defensora del Pueblo del Estado -a la que expusimos el problema detectado- nos ha trasladado que ha dirigido una Recomendación a la Dirección General de Política Universitaria (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) para que aborde la modificación de la normativa



que regula el acceso a los estudios de Grado y se recoja expresamente la reserva del cupo de discapacidad en el mes de septiembre.

Aplaudimos esta iniciativa ya que, en tanto no se produzca la modificación normativa instada al Ministerio, las Universidades andaluzas no podrán reservar las plazas del cupo de discapacidad para la convocatoria de septiembre, sino únicamente articular la ampliación de plazas respecto de las inicialmente aprobadas, tal como se ha hecho para el presente curso 2014-2015, con objeto de poder atender la demanda de las personas con discapacidad.

El otro supuesto problemático ocurrido durante 2014 en relación a este cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad se originó en relación a las personas con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. Estas personas tienen derecho de acceso a la Universidad por este cupo de reserva, pero tienen dificultades para poder ejercer este derecho al no quedar explicitado en la normativa reguladora cuales son los documentos que acreditan esta situación.

Tras recibir algunas quejas por este motivo, se consideró oportuno iniciar de oficio la [queja 14/2981](#), en el curso de la cual nos dirigimos a la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, así como a las distintas Universidades públicas de Andalucía con objeto de conocer la incidencia que tienen las solicitudes de acceso por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad por presentar necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y la respuesta que se hubiera ofrecido en cada caso.

En la información recibida se pone de manifiesto que, hasta la fecha, las personas que han solicitado acogerse a esta vía no han podido acreditar tener una discapacidad que originase las medidas educativas especiales permanentes, habiéndose incluso facilitado



un plazo adicional para que pudiesen ser valoradas en la preceptiva discapacidad por el órgano competente.

Por otra parte, en relación con la posible solución al asunto expuesto se destacan las dificultades que entraña la falta de un marco legislativo superior que permita avanzar de manera coordinada a las Comunidades Autónomas en relación con el desarrollo de medidas educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad.

Dado que en el proceso de admisión a los estudios universitarios participan personas de toda España, se sostiene, con buen criterio, que los mecanismos deberían ser comparables.

En cualquier caso se nos indica que, en el próximo Acuerdo de Distrito Único que regirá la admisión al curso 2015-2016, se recogerá la presentación de aquellos documentos que sean más apropiados para acreditar, al menos en el entorno andaluz, la condición de las personas con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, y que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

A la vista de esta información, de la que se desprende que el problema planteado en la presente queja se encuentra en vías de ser solucionado, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones. Sin perjuicio de ello, también nos hemos dirigido a la Defensora del Pueblo del Estado con objeto de someter a su consideración la posibilidad de intervenir en este asunto ante todo el territorio español a fin de evitar que puedan producirse situaciones de desventaja para el alumnado procedente de otras Comunidades Autónomas.